

Socialismo Hoy

Publicación del Partido de los Trabajadores, Sección oficial para Costa Rica de la Liga Internacional de Trabajadores - Cuarta Internacional (LIT-CI)

Diciembre 2020 - N°114 Año XIII - Precio solidario



Costa Rica
exige no más
Impuestos!!

EL VERDADERO DIÁLOGO ES CON EL FMI, A ESCONDIDAS

Diciembre 2020 | Año XIII N°114

Contenidos

Nacionales

El verdadero diálogo es con el FMI, a escondidas

Nacionales

Urge una auditoría sobre la deuda pública

Nacionales

Los detalles del tramposo “diálogo multisectorial”

COVID-19

¡Vacunación para todos!

Mujer

2020: Un año de lucha y resistencia del movimiento de mujeres

Nacionales

Gobierno anuncia regreso a la presencialidad en el curso lectivo 2020

Nacionales

Costa Rica y la incansable desigualdad

Juventud

Proceso de admisión a universidades públicas debe ser universal

Nacionales

El verdadero diálogo es con el FMI, a escondidas



El pasado 23 de noviembre culminó la primera fase del llamado diálogo nacional promovido por Carlos Alvarado con la participación de múltiples sectores, los cuales se sumaron a ese espacio después del primer fracaso auspiciado por el Estado de la Nación.

Sin mayor sorpresa en el espacio convocado por la Presidencia no se discutió la negociación con el FMI que había sido pausada tras las protestas de octubre. Aunque era un secreto a voces que un posible acuerdo con el fondo sería la prioridad del gobierno, la directriz del Ejecutivo fue clara de “no referirse al tema de la negociación con el FMI durante el diálogo con sectores” (La Nación).

Es decir, sin ningún reparo Carlos Alvarado reconoce que “Sí, vamos a acudir al FMI” y que la estrategia y puntos de posibles acuerdos se mantuvieron conscientemente ocultos durante las mesas de trabajo. Siempre hemos dicho que el famoso diálogo era una trampa ahora se confirma en boca del propio Presidente el carácter espurio de dicho espacio.

La negociación con el FMI que es la que verdaderamente le interesa al gobierno nunca se detuvo, solamente se mantuvo en secreto o como dice Alvarado son “conversaciones que se tienen, a nivel informal, con el Fondo”. Mientras la mayor parte de la dirigencia sindical le compraba el discurso al gobierno y sectores del Frente Amplio como Patricia Mora o Sofía Guillén participaban de forma entusiasta del diálogo, las verdaderas conversaciones se llevaban tras bambalinas y a puerta cerrada entre Ejecutivo y FMI; esa trampa nosotros la sabíamos, lo único nuevo es que ahora el propio gobierno lo reconoce públicamente con su confesión a La Nación.

Un futuro de sacrificios y entregas al FMI

Alvarado insiste en que acudir al FMI es una necesidad para afrontar el futuro del país en mejores condiciones aunque sean “difíciles las soluciones”. Para tener una idea podemos valorar solos dos de las propuestas de negociación que el ejecutivo sigue impulsado: congelar salarios por 12 años e impuestos del 13 del IVA a toda la canasta básica; si esto se atreven desde ahorita a decir en público nada más de imaginarnos lo que desde ya están entregando en privado y de espaldas al pueblo.

Como también ya lo hemos dicho, cualquier país que desee defender su soberanía y no quiera continuar hipotecando su futuro debe rechazar las imposiciones del FMI, que al fin y al cabo lo que hace es precisamente imponer su agenda de entrega a las grandes potencias imperialistas y a los intereses de los grandes capitalistas en el mundo.

Cajita blanca para Patricia Mora y el Frente Amplio

Tras el reconocimiento público de que continúan las negociaciones con el FMI la ex diputada del FA Patricia Mora anuncio su renuncia al cargo de Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta y Presidenta Ejecutiva del INAMU. Mora argumenta que el Presidente estaría dejando de lado el supuesto esfuerzo del diálogo para ceder a las presiones de los grandes empresarios al anunciar que acude al FMI.

Para Patricia Mora no fueron causas anteriores de renuncia al cargo la aprobación de la nefasta reforma fiscal, la antidemocrática ley anti huelgas o la represión que viene llevando adelante el gobierno desde el 2018 y que ha recrudecido en los últimos meses. Ahora renuncia con una maniobra oportunista y electorera, se mantuvo en el barco de Alvarado junto a personajes detestables como Rocío Aguilar Edna Camacho y se va recién cuando el gobierno tiene los peores índices de popularidad y con miras al proceso electoral que ya prácticamente está en curso.

Pese a su salida por la forma en la que se conducen las negociaciones, lo cierto es que ni Patricia Mora, José María Villalta o Sofía Guillen se oponen acudir al FMI. Su postura por el fondo de acudir al FMI es muy similar al gobierno.

Repudiar al FMI y organizar la lucha

Lamentablemente con la trampa del diálogo el gobierno ha venido ganando terreno. Hoy se encuentra de manera momentánea en mejores condiciones relativas para imponer la agenda de FMI en el país; este es el verdadero resultado de las mesas de diálogo, allanar la cancha y facilitarle las cosas al gobierno.

No obstante, el propio Presidente sabe que su situación aún es muy frágil y que el rechazo popular es muy grande. De ahí que no solo apostó por la trampa del dialogo, sino que también endureció la represión a las luchas persiguiendo a dirigentes locales, reprimiendo cualquier atisbo de bloqueo e impulsando procesos judiciales contra más de un centenar de personas que estuvieron al frente de los más reciente bloqueos.

Para recomponer la lucha es necesario en primer lugar romper con cualquier ilusión en un diálogo con el gobierno o de una negociación favorable con el FMI. También denunciar a todos aquellos dirigentes sindicales y partidos como el Frente Amplio que sirven de pata para sostener la mesa en la que el gobierno le sirve nuestros derechos al FMI.

También es vital condenar la represión y defender a todos aquellos que están siendo procesados. La represión policial y judicial seguirá siendo la carta de salvación de un gobierno en crisis, la única forma de hacer avanzar la lucha es revertir la criminalización con la más amplia solidaridad.

Como parte de la lucha el Partido de los Trabajadores levanta también una alternativa socialista y de la clase trabajadora. No basta con el repudio al FMI, debemos también impulsar nuestro programa para que la crisis la paguen los ricos, para suspender y auditar la deuda, para nacionalizar las actividades estratégicas (carreteras, puertos, industria alimentaria y médica, etc.) y por un gobierno de los trabajadores.

Nacionales

Urge una auditoría sobre la deuda pública



En nuestro país desde hace varios años se viene hablando del problema del déficit fiscal, es decir que el gobierno tiene más gastos que ingresos. El año pasado cerró con un déficit fiscal equivalente al 6.96% del Producto Interno Bruto, es decir unos 2 millones de millones de colones. Para este 2020 estamos cerrando con un déficit equivalente a un 9.3% del PIB es decir unos 2.6 millones de millones de colones.

Desde el Partido de los Trabajadores tenemos más de 4 años de estar insistiendo en que el problema está centralmente en la evasión fiscal, no en los gastos del Estado, sino más bien en que los grandes empresarios no pagan impuestos. Este déficit fiscal ha hecho que los gobiernos se endeuden más y más todos los años, pateando la pelota para adelante, haciendo que se gaste una gran cantidad de nuestro presupuesto solo en el pago de la deuda. Para que tengamos una idea, el 42.4% del presupuesto del año entrante se va gastar solo en pagos de la deuda pública, ese monto equivale a 4.8 millones de millones de colones, con este dinero podríamos construir 34 hospitales como el nuevo hospital que se piensa construir en Puntarenas.

¿Cómo se origina el déficit fiscal?

Las cámaras de los grandes empresarios como los UCCAEP, el gobierno, y la mayoría de los partidos políticos como el PAC, PLN, PUSC, Restauración Nacional, y otros dicen abiertamente o plantean las políticas para enfrentar la crisis fiscal bajo la premisa de que la causa de la crisis fiscal está en los gastos del Estado, más concretamente en los gastos en los salarios de los trabajadores del sector público.

Esta visión es muy útil para la burguesía, porque nos divide como trabajadores y pone a los trabajadores del sector privado en contra de los trabajadores del sector público, así mientras tanto distraen la atención de los verdaderos culpables, los grandes empresarios.

Quienes han causado el déficit fiscal son los grandes empresarios, que evaden impuestos y que además tienen privilegios fiscales que los exoneran del pago o les permite no pagar. Por ejemplo, en el 2008 según estimaciones hechas por el periódico El Financiero, la evasión fiscal rondaba los 995 mil millones de colones, y si no existieran los privilegios fiscales a los grandes empresarios y además no evadieran impuestos no solo no habría déficit fiscal, sino que sobrarían alrededor de 100 mil millones de colones.

En el 2013 según un estudio del Ministerio de Hacienda la evasión fiscal era de 8.22% del PIB, y para ese año el déficit fiscal era del 5.4% del PIB. Es decir que si para el 2013 los grandes empresarios (que son quienes evaden impuestos) hubieran pagado, no solo no hubiera habido déficit fiscal, sino que además habría sobrado alrededor de 673mil millones de colones. Es decir, si ese año los grandes empresarios hubieran pagado lo que les correspondía de impuestos, habría sobrado dinero suficiente para construir 5 hospitales como el nuevo hospital de Puntarenas.

¿Quiénes le prestan al estado?

Como el Estado no tiene dinero porque los empresarios no pagan, se ve obligado a pedir dinero prestado para solventar sus gastos. Recientemente salió un estudio sobre quienes son los acreedores de esa deuda pública, es decir quienes son los que le han prestado el dinero al Estado.

Ese estudio reveló que mayoritariamente somos nosotros mismos, los trabajadores quienes le estamos prestando dinero al Estado, o por lo menos es nuestro dinero el que le están prestando. Esto es así, porque la mayor parte del dinero que se le ha prestado a los distintos gobiernos viene de los fondos de nuestras pensiones.

Del total de la deuda interna del país, el Estado le debe el 27% a las Operadoras de Pensiones Complementarias, 14% a la Caja Costarricense del Seguro Social, y a la Junta de Pensiones del Magisterio el 12%. En total esto significa que el Estado, producto del robo de los impuestos de los grandes empresarios, le debe a nuestras pensiones 9.63 millones de millones de colones (73 hospitales de Puntarenas para seguir con este ejemplo).

En todas estas operaciones de prestamos hay miles de millones que van a parar a los bolsillos de los banqueros, sea en comisiones por administración de los fondos de pensiones complementarias (muchos de los cuales están en bancos privados), o como comisiones por las transacciones bancarias.

A los trabajadores nos roban por todas partes

Como podemos ver a los trabajadores nos roban por todas partes. Los grandes empresarios no solo se hacen millonarios con la explotación de nuestro trabajo, es decir con la riqueza que les generamos, además de eso nos roban cuando nos irrespetan nuestros derechos laborales (salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, liquidaciones, horas extra, seguro social, etc.).

Por otro lado, los grandes empresarios se roban la plata de los impuestos, dinero que se podría invertir en salud, educación y generación de empleo.

Esto hace que se genere un déficit fiscal y que el Estado pida prestado el dinero de nuestras pensiones. Después nos quieren cobrar más impuestos a nosotros los trabajadores como con el IVA, y el impuesto a la canasta básica, para que sea con el dinero de nuestros impuestos que se nos pague la deuda al dinero de nuestras pensiones.

Mientras tanto, continúan los negocios corruptos en el gobierno con los grandes empresarios, a ellos les perdonan las deudas de impuestos, haciendo a los ricos son cada vez más ricos y nosotros los trabajadores cada vez más pobres.

Urge una auditoría sobre la deuda pública

Desde el Partido de los Trabajadores hemos venido insistiendo en que es necesario suspender el pago de la deuda pública, porque esta deuda es impagable. Pero esta suspensión tiene que venir de una auditoría de esa deuda.

No podemos permitir que se roben el dinero de nuestras pensiones. Es necesario hacer una investigación para ver quiénes son los responsables del déficit fiscal. Es necesario determinar, quiénes son los evasores que se han robado la plata de los impuestos generando el déficit fiscal, quiénes son los que se han beneficiado con los negocios corruptos del estado, para que sean ellos quienes paguen la crisis fiscal, y no nosotros los trabajadores con nuestras pensiones y nuestros impuestos. Son los grandes empresarios los que deben pagar la crisis con sus fortunas, y son los grandes evasores los que deben pagar con sus capitales.

¡Que la crisis la paguen los grandes empresarios que la generaron!

Nacionales

Los detalles del tramposo “diálogo” multisectorial



El diálogo multisectorial concluyó el 23 de noviembre con 58 propuestas entre los diferentes sectores que acudieron al llamado del gobierno. Antes de entrar a discutir las propuestas votadas en este espacio, hay que comentar acerca de las circunstancias en que se dio este “diálogo”: los bloqueos del pueblo trabajador en todo el país contra el préstamo al FMI para supuestamente mejorar la situación del país, marcada por la pandemia y la crisis económica que se viene arrastrando durante varios años por el déficit fiscal.

Los bloqueos demostraron una enorme combatividad y metieron aún más en crisis al gobierno, que reprimió y encarceló a cientos de dirigentes, activistas e incluso a miembros de prensa alternativa como Stella Chinchilla. Había una urgencia para desmontar este histórico proceso de lucha y el gobierno optó por la trampa del diálogo multisectorial.

Más propuestas para que sean los trabajadores quienes paguen por la crisis

En el caso del diálogo multisectorial, las propuestas se dividen en diferentes ejes, los cuales se irán viendo uno por uno. Debido a la gran cantidad de iniciativas tomadas, no se podrá analizar en detalle, pero sí analizar de manera general y explicar a qué intereses de clase responden y qué podemos esperar desde los sectores populares en caso de aprobarse.

Sobre reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza: Sobre este punto se formularon catorce propuestas. Predominaron las solicitudes al Poder Ejecutivo sobre simplificación de trámites, entre ellos reducción de costos de tarifas eléctricas y “mayor eficacia y transparencia en la gestión de programas e inversión social”.

Esto significa más de lo mismo: la llamada simplificación de trámites implica eliminar controles al gran capital y dejarlos que sigan recibiendo privilegios por los diferentes gobiernos, entre esos privilegios es que paguen todavía menos por la electricidad. Esa reducción del costo para los ricos lo termina pagando el pueblo con aumentos en los servicios. Sobre el tema de la eficiencia en programas sociales es la forma bonita de decir que se avecinan más recortes en becas como avancemos o los programas sociales del IMAS.

Sobre propuestas fiscales de alto consenso: se generaron 9 propuestas encaminadas principalmente en mejorar la eficiencia en los procedimientos fiscales y de control, con iniciativas como Hacienda Digital o canales de comunicación ágiles y efectivos entre Aduanas y Tributación. Además, emerge una idea que llama la atención que tiene que ver con recomendar a la Asamblea Legislativa “priorizar la reducción de la deuda política en al menos un 40%”.

De palabra se dice “Aplicar de manera irrestricta la normativa y el combate a la evasión y elusión fiscal”, pero nunca se habla de los mecanismos para hacerlo, es decir, no se habla de derogar las leyes ni los mecanismos para que esto se dé. Ninguna de estas son propuestas fiscales de impacto, que de verdad reduzcan uno de los puntos causantes de la crisis fiscal: la evasión y la elusión fiscal por parte de los grandes empresarios. Mientras no se combatan los mecanismos legales para no pagar impuestos (por eso en este diálogo no se habló de los Panama Papers), se pueden tener los sistemas tecnológicos de control más eficientes del mundo, pero el tema de fondo no se va a solucionar.

Sobre gestión de la deuda pública: de las 11 propuestas la línea va en el sentido similar de mejorar los mecanismos dentro del Estado para reducir, por ejemplo, la brecha de morosidad. También se menciona “transparentar integralmente la gestión de la deuda” o “diversificar los instrumentos de financiamiento (posibilidad de emitir bonos verdes)”. Todas son propuestas para no encarar el problema de fondo que para nosotros tiene que ver con la necesidad de suspender los pagos de una deuda que desangra las finanzas públicas.

Entre las restantes 24 propuestas se manejan algunas que en teoría podrían ser progresivas, como “presentar un proyecto de ley que prohíba la actividad económica de personas funcionarias públicas en paraísos fiscales” o implementar un sistema de “Renta global” para 2023, pero en el fondo se continúan los ataques contra los presupuestos públicos y al Estado en general: se da un impuesto a los premios de lotería, el cierre de CONAPE o “ajustes presupuestarios por €170 mil millones por debajo de la regla fiscal para el 2020 sin tocar gasto de capital. Esto se suma a la reducción en el 2021 de 7.5% respecto al gasto primario del 2020”. De ese 1,4% del PIB que se quiere reducir con estas medidas, casi todo 1,18% pertenece a más ataques al ya debilitado aspecto de presupuesto, venta de instituciones del estado y a la planilla pública.

Estas medidas llegarán a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, que ya anunció que acudirá sí o sí al Fondo Monetario Internacional. El escenario posible de estas 58 propuestas del diálogo multisectorial es que se avance en las propuestas que impliquen seguir beneficiando al gran empresariado, por ello Carlos Alvarado sigue diciendo que no va a tocar a los sectores productivos. Además, se impulsarán aquellas medidas que promueven ataques al Estado, que son la mayoría, y que, como ha sucedido siempre, aquellas iniciativas que apuntan, aunque sea tímidamente a la evasión fiscal o incluso a fortalecer las Pymes caigan en el olvido.

Con el diálogo multisectorial se está cumpliendo el plan de los sectores patronales y los partidos que los apoyan: desmontar la lucha con la complicidad de las dirigencias y en el marco de la salida “democrática” del diálogo, imponer su agenda. Tocar a los sectores populares de base discutir una respuesta que implique retomar las calles.

COVID-19**¡Vacunación para todos!**

Es muy probable que Costa Rica termine el año con más de 160 mil casos confirmados de Covid-19, al 12 de diciembre han fallecido 1985 personas a merced de la enfermedad. En el contexto del fin de año, donde las reuniones familiares y de amistades solían ser algo común, en el presente año podrían ser como combustible al fuego de la pandemia. El gobierno insiste en avanzar con las aperturas, el trabajo y las clases presenciales; políticas que no hacen más que acelerar el contagio del virus. Mientras los sistemas de salud se saturan, las noticias de las primeras aplicaciones de la vacuna a nivel mundial parecen ser la esperanza.

Estas vacunas están saliendo de sus fases de prueba, recibiendo la aprobación de organismos internacionales y en países como Gran Bretaña y Chile están comenzando a ser aplicadas. Sin embargo, presentan la incertidumbre de por cuánto tiempo es eficaz. Se conocen casos de personas que se han contagiado del virus varias veces, indicando que los anticuerpos generados tienen poca duración. De esta forma las vacunas serían una solución momentánea.

Por otro lado, el acceso a la vacuna destapa la cara más voraz del capitalismo. Los medicamentos son accesibles sólo a los que pueden pagarlo. La cara del imperialismo es la competencia entre países por acceder a la vacuna. Donde los más poderosos tienen prioridad en su acceso, porque son quienes pueden pagar más y más pronto. El presidente Trump prometió que luego que la FDA (agencia que regula alimentos y medicamentos en EEUU) la primera vacuna sería aplicada 24 horas después. Por otro lado, Costa Rica a pesar de tener contratos desde ya para comprar vacunas, la campaña de vacunación arrancararía en algún momento del tercer trimestre del 2021, aún sin fecha definitiva.

La vacuna en el país

El país tiene negociaciones por 6 millones de dosis, cada persona necesita dos dosis así que esta cantidad alcanzaría para 3 millones de habitantes. Las empresas proveedoras son COVAX-Facility, Pfizer BioNtech y AstraZeneca. Mientras que AstraZeneca vendió en 4\$ cada vacuna al país, a través del programa COVAX-Facility, se pagó un poco más de 10\$ por vacuna. Esa diferencia en los costos es producto de la especulación, el contrato con COVAX fue de los primeros que se firmó.

La vacuna de Pfizer será la primera en llegar al país, aportando dosis para 1,5 millones de personas. Pero se sabe que no alcanzan para toda la población, así que están sujetas a un plan de vacunación que pone primero a las poblaciones de mayor riesgo como lo son adultos mayores y personas con condiciones médicas de riesgo. Esta medida tiene una justa intención que es evitar y detener el aumento de las muertes; además de proteger a los más vulnerables.

Pero, no sirve este plan para detener el contagio, ya que las personas que están transmitiendo el virus normalmente lo obtienen en su centro de trabajo o camino al mismo. Defendemos que debe garantizarse la vacuna para todas las poblaciones en riesgo de morir por la enfermedad. Pero también debe garantizarse para el pueblo trabajador en general, el que no tuvo cuarentena para cuidar su salud y debe arriesgarse todos los días camino al trabajo. Hasta que no se vacune a toda la población no se detendrán realmente los contagios.

Mujer

2020: Un año de lucha y resistencia del movimiento de mujeres



Aunque la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto brutal para la clase trabajadora, los efectos no han sido los mismos para mujeres trabajadoras que para hombres. Como en todas las crisis, somos las mujeres las que llevamos la peor parte.

En este artículo queremos hacer una breve reseña de los principales hechos de este 2020 en relación a los derechos de las mujeres.

Empleo: las mujeres tienen menos opciones laborales, pero más trabajo

Antes de la pandemia, el acceso al mercado laboral ya era un desafío especialmente para las mujeres. Esta situación se profundizó con la crisis sanitaria, donde no solo fuimos las más afectadas por el desempleo (donde la tasa de desempleo entre las mujeres alcanzó el 29% en el III trimestre) sino también por medidas como la reducción de jornada o suspensión de contratos, y aún más en labores poco remuneradas y con poca o nula protección laboral donde la población es mayoritariamente femenina, como las trabajadoras domésticas o cocineras.

Esto se combinó con una mayor recarga de trabajo en los hogares, dificultando aún más el acceso de las mujeres al mercado laboral. Las medidas de distanciamiento social, el cierre de los centros educativos y los servicios de salud sobrecargados han implicado una mayor carga sobre las mujeres para cubrir las necesidades domésticas y el cuidado de otras personas.

Violencia: la otra pandemia

Los datos de violencia contra las mujeres ya eran aterradores antes de la pandemia, pero el peligro ha aumentado aún más para todas aquellas mujeres que quedaron confinadas y acompañadas de sus agresores. Al 26 de octubre de este año, los datos oficiales registraban 11 femicidios, pero el número podría ser mucho mayor, ya que la clasificación de una muerte violenta como femicidio puede tomar incluso más de un año.

Mientras la violencia y el peligro aumenta, se mantiene un fuerte cuestionamiento al abordaje que se da ante la desaparición y muerte de mujeres, no solo por el terrible desenlace de femicidios como el de Luany, donde fue su familia la que halló sus restos, sino también ante las declaraciones de Walter Espinoza, Director del OIJ, quien ha hecho alusiones estigmatizantes sobre víctimas de femicidio, reforzando la naturalización de la violencia. Por eso ha sido aún más indignante que al cierre de este año, el mismo OIJ premiara el caso del femicidio de Allison Bonilla como la mejor investigación del 2020, en un claro acto de provocación al movimiento de mujeres que exige la renuncia de su director.

Derechos sexuales y reproductivos: la salud y la vida de las mujeres son puestas en espera

Uno de los temas más debatidos en los últimos años ha sido la firma de la Norma Técnica para el procedimiento médico del Aborto Impune. Fue después de mucha presión del movimiento de mujeres que finalmente el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto de la norma técnica, luego de haber dicho en reiteradas ocasiones dijera que ésta no era una de sus prioridades. Pero aunque el decreto de la norma fue firmado a finales del año anterior, era necesario un protocolo que debía presentarse en un plazo de 6 meses para poder ejecutar su contenido. Sin embargo, no fue sino hasta casi un año después que este fue aprobado.

Estos retrasos, que son recurrentes en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, son el reflejo de una violencia institucionalizada que evidencia la poca importancia que se le da a nuestra salud y nuestras vidas, especialmente en periodos como este donde la pandemia ha sido utilizada como justificación para poner en pausa nuestros derechos.

Renuncia de la Ministra de la condición de la Mujer: una salida tardía

A inicios de este mes, Patricia Mora anunció su renuncia a sus puestos de Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Según el comunicado, su renuncia se debe a que mientras se encontraban en las mesas de diálogo el gobierno habría acordado iniciar negociaciones con el FMI y esto sería para ella “un acto simbólico que da cuenta de la impertinente y vergonzosa intromisión de los grupos empresariales en el ámbito soberano del Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, la intromisión de grupos empresariales no es nada nuevo. La misma Patricia Mora conformó junto a Epsy Campbell, un grupo de mujeres, en su mayoría provenientes del sector empresarial, para asesorar al Gobierno en acciones para mitigar los efectos económicos y sociales causados por la pandemia.

Desde el PT hemos dicho que esta renuncia viene tarde, y las razones que presenta más bien un cálculo político electoral que esconden un apoyo vergonzante a la política represiva del gobierno PAC.

El año cierra con un movimiento de mujeres en expansión

A pesar de la crudeza con la que se han descargado los efectos de la crisis económica y sanitaria sobre las mujeres, el movimiento ha sido un ejemplo en las acciones de resistencia y denuncia, siendo de los primeros sectores que salieron a la calle este año, aun desafiando el temor a la pandemia.

Esta organización se ha extendido a lo largo del territorio nacional e incorporando a una generación de mujeres jóvenes que inclusive han obligado a las instituciones a actuar, como ocurrió recientemente la denuncia de un chat de telegram donde se compartían fotos de contenido sexual de mujeres.

El próximo año nos encontrará con nuevos retos, donde continuaremos enfrentando las consecuencias de las políticas que este año profundizaron la opresión sobre las mujeres. Por eso tendremos que seguir fortaleciendo las acciones y la organización, donde el resto de movimientos políticos, sindicatos y grupos organizados deben asumir también su responsabilidad e incorporar en sus agendas las demandas de las mujeres para fortalecer la lucha.

Nacionales

Gobierno anuncia regreso a la presencialidad en el curso lectivo 2021



Esta última semana las autoridades de las universidades estatales han declarado que empezarán a retomar la presencialidad a partir de febrero. Al mismo tiempo que el gobierno ha venido anunciado sobre la posibilidad de regresar de forma parcial a las aulas en el curso lectivo 2021 en lo que llaman una categoría bimodal, es decir, una parte virtual y otra parte con asistencia física. Esto bajo la Estrategia Regresar, la cual ya había sido elaborada para que fuera implementada después de las vacaciones de medio período de este año, pero luego se canceló ante el aumento significativo de casos de COVID-19.

Aunque dicha estrategia intenta incorporar todos los protocolos y procedimientos sanitarios para la prevención del contagio del virus, aún hay una serie de factores que no se toman en cuenta:

- Mantener el uso de mascarillas y estrictos protocolos de distanciamiento en un contexto donde lo natural es la interacción con los demás compañeros, principalmente de aquellos más pequeños que son muy espontáneos y parte de su proceso de aprendizaje es a través del juego.
- No hay claridad si se van atender grupos completos o solo la mitad. Que con esto se evidencian las problemáticas que se padecían antes de la pandemia y que solo se intensifican aún más frente a la crisis, como el hacinamiento en las aulas y que evidentemente es imposible respetar los 1,8 m de distancia entre 40 estudiantes en los espacios reducidos de las aulas. Ahora bien, tampoco se conoce como se van a manejar los horarios, tanto de los estudiantes como el de los docentes. Pues este año hubo una sobrecarga de tareas para los estudiantes con decenas de Guías de Trabajo Autónomo a realizar por semana. Al mismo tiempo un gigantesco volumen de trabajo para los docentes, atendiendo estudiantes y padres de familia por todos los medios virtuales a los que tuvieran acceso, junto con la elaboración de clases, informes, reportes, reuniones y demás, sin un horario definido, lo que significaba recibir mensajes, llamadas y correos a cualquier hora del día, noche o madrugada. Y con la bimodalidad se aumentaría aún más la carga laboral al tener que preparar materiales y clases para la modalidad presencial y virtual.
- Por otro lado, no todos los centros educativos tendrían la posibilidad de regresar a la presencialidad, pues va a depender de las condiciones en las que se encuentren sus instalaciones, lo que significa mayor ventaja para algunas poblaciones estudiantiles sobre otras, mismas que suelen ser las más empobrecidas y marginadas.
- Ahora, en esa Estrategia se pide a los estudiantes llevar el equipamiento necesario para la implementación de los protocolos de salud, aumentando el presupuesto para la compra de los útiles escolares, sabiendo que una gran cantidad de familias ya de por sí tenían serias dificultades para comprar lo básico.

¿Cómo ha sido la experiencia en otras partes del mundo?

Según mencionó la viceministra académica del Ministerio de Educación, Melania Brenes, se está tomando en cuenta la experiencia de otros países, como Estados Unidos y Europa, que recién iniciaron su curso lectivo en septiembre. Sin embargo, el resultado no ha sido nada positivo. Por ejemplo, Nueva York era la única ciudad estadounidense que planteaba un retorno presencial a la escuela y anunciaba con bombos y platillos que sería el mayor distrito escolar en el país en retomar las clases presenciales. Pero ante la tensión de la segunda ola del Coronavirus y las inquietudes manifestadas por los sindicatos de maestros, se aplazaron dos veces las fechas de un regreso físico.

Por otro lado, en la Universidad de Alabama, 1200 estudiantes dieron positivo en la prueba del coronavirus en tan sólo una semana de clases semi-presenciales. La Universidad de Kansas y la Universidad Temple, en Filadelfia, suspendió por dos semanas las clases presenciales después de que 106 alumnos contrajeran la enfermedad (INFOBAE).

Por otro lado, Europa decidió lanzarse a la reapertura presencial de las escuelas desde fines de agosto, permitiendo a esta altura cuantificar el riesgo y las consecuencias del regreso presencial a clases, por lo que a finales de septiembre, o sea, alrededor de un mes del inicio de clases el reporte fue:

- La Asociación de Profesores Alemanes estima que alrededor de 700 escuelas del país se vieron afectadas por cierres parciales o completos.
- En Francia, a solo cuatro días de la reapertura escolar, 22 centros fueron cerrados con 5612 contagios totales entre alumnos y 1 153 entre profesores.
- El Departamento de Educación de Inglaterra informa que el número de escuelas en ese país afectadas por brotes de coronavirus ha ido en aumento, siendo las escuelas secundarias las más comprometidas.
- Y según informó el diario Il Sole 24 Ore de Italia, dos semanas después de la reapertura de las escuelas, 75 centros educacionales fueron cerrados por brotes de Covid-19 y 417 establecimientos estaban con alguna clase de cuarentena.

Por lo tanto, con base en los datos generales esbozados anteriormente, la intención del regreso físico a las aulas debería ser un NO rotundo. Considerando que eso implica un movimiento muy grande de personas transportándose de un punto a otro por diferentes vías, causando aglomeraciones. Y aunque los niños, adolescentes y adultos jóvenes no son parte de la población vulnerable, no significa que sean totalmente inmunes y que también porten y transmitan la enfermedad, así también, muchos de los padres de familia y encargados, personal docente y administrativo de los centros educativos u otros que dan servicios relacionados, si pueden pertenecer a dicha población.

Pero es evidente que esto obedece a la insistencia y presión generada por los sectores empresariales que en definitiva dictan el rumbo político y económico del país. Pues el regreso a clases en una modalidad “normal” representa la activación de muchas otras actividades económicas que se mueven alrededor y los grandes beneficiados no son los pequeños y medianos negocios, sino las grandes cadenas de librerías y tiendas que acaparan el mayor porcentaje del comercio. Además, estas propuestas del gobierno van dirigidas a que se implante la idea de que tenemos que vivir con esto y hay que empezar a retomar la nueva normalidad y eso significa normalizar los contagios y las muertes de trabajadores diariamente, para que todas las actividades productivas no se detengan y se sigan generando las ansiadas ganancias que acumula ese pequeño grupo de ricos.

Por eso desde el Partido de los Trabajadores no nos cansamos de denunciar la actitud deshumanizada que han mostrado claramente las cámaras y asociaciones del empresariado, quienes junto con el gobierno han desangrado y exprimido aún más al pueblo con acciones y propuestas que no tocan un cinco de las ganancias de ellos, pero que si sobrecargan el peso en los trabajadores, manteniendo el pago puntual de una deuda enorme que no sabemos quiénes son sus acreedores, mientras que el desempleo, el desfinanciamiento de la CCSS y el déficit fiscal aumentan aceleradamente.

De la misma forma, hacemos un llamado a los sindicatos del sector público, en este caso particular a los del magisterio, a que retomen la lucha con una agenda clara y definida que marque el camino de la organización en defensa y protección de su sector. Pero sabemos que la afectación no es sólo para el sector de educación, sino que trasciende a todos los demás, por lo tanto, la unión de todos los sindicatos y trabajadores como uno solo es necesaria y no en mesas de diálogo que resultan engañosas y desmovilizadoras, sino en las calles y con métodos de lucha efectivos, propios de la clase trabajadora organizada.

Nacionales

Costa Rica y la incansable desigualdad

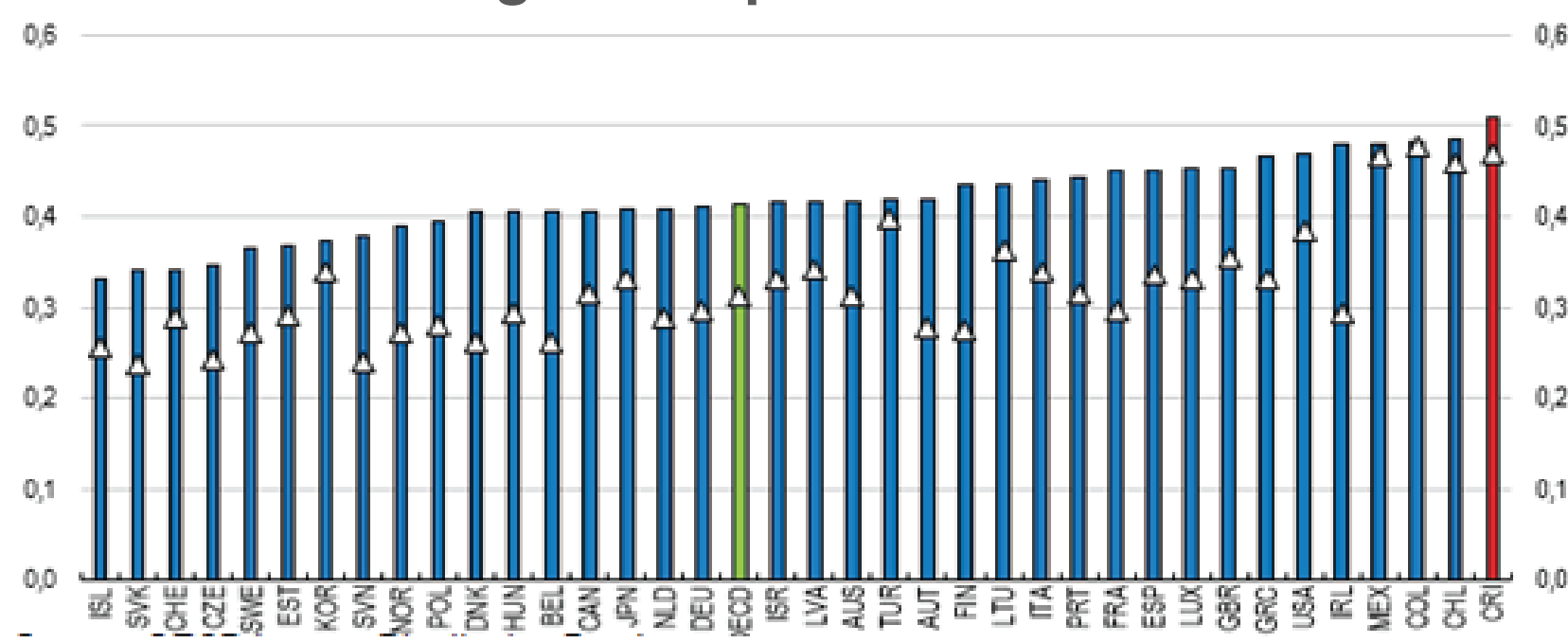


La crisis sanitaria producida por la covid-19 ha dejado algo muy claro: el gobierno de C.A. ha velado por proteger las grandes ganancias acumuladas por la clase empresarial.

Esto ha provocado un grave deterioro en la desigualdad, que, si bien desde años atrás ya era un problema, estas acciones se han encargado de hacerlo más notable.

El índice de Gini es el modelo utilizado a nivel mundial para mostrar los niveles de desigualdad, utilizando cifras entre 0 y 1 donde 0 es un nivel perfecto de igualdad y 1 es el máximo nivel de desigualdad.

Desigualdad por índice de Gini



Fuente: OECD Income Distribution Database.

Según un informe realizado por la OCDE en Julio de este año, Costa Rica presenta un preocupante 0.51, superior al promedio de AL ubicado en 0.46 y lo que nos pone en una situación más desigual que países como Chile, Colombia o México.

Esta desigualdad es notoria al analizar la encuesta de ingreso de los hogares 2020 del INEC, que muestran como al juntar los hogares de los 2 deciles más ricos del país, sus ingresos son mayores que el del 80% de la población restante.

Distribución del ingreso

Decil de ingreso por hogar	Ingreso promedio	Promedio de miembros por hogar
I	₡136 248,10	3,83
II	₡264 613,08	3,64
III	₡327 451,34	3,26
IV	₡435 411,63	3,38
V	₡536 640,39	3,28
VI	₡665 541,15	3,13
VII	₡871 221,34	3,15
VIII	₡1 125 665,78	2,92
IX	₡1 633 654,52	2,86
X	₡2 923 910,16	2,36

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC

A pesar de todo esto el gobierno de turno no ha tenido más que una agenda alineada a la UCCAEP en pro de la clase empresarial, donde ha utilizado políticas proteccionistas a los grandes capitales y defendiéndolas con las fuerzas represivas del estado.

Además de implementar medidas empobrecedoras como recortes a la educación, violentos desalojos a campesinos y reducciones a las jornadas laborales.

El gobierno insiste a que, a pesar del rechazo de la clase trabajadora, se negociará sí o sí con el FMI, un préstamo que solo traerá más impuestos, pobreza y desigualdad al país.

Por lo que desde el Partido de los Trabajadores hacemos un llamado a la necesidad de un programa socialista y revolucionario para la clase trabajadora.

La desigualdad actual no se podrá combatir hasta no atacar los grandes capitales y el poderío de las grandes multinacionales y bancos que han generado un círculo vicioso de pobreza en todo AL.

Es indispensable suspender el pago de la deuda pública para así utilizar esos recursos en obtener un pleno empleo, garantizar vivienda, salud y tierra.

Así mismo se debe encarcelar y expropiar a los grandes evasores, estatizar el sistema financiero y poner los medios de producción en manos de los y las trabajadoras.

Todo esto solo podrá lograrse radicalizando los métodos de lucha, uniendo a los distintos sectores sociales y teniendo 0 confianza en partidos traidores como el Frente Amplio.

¡Que la crisis la paguen los ricos!

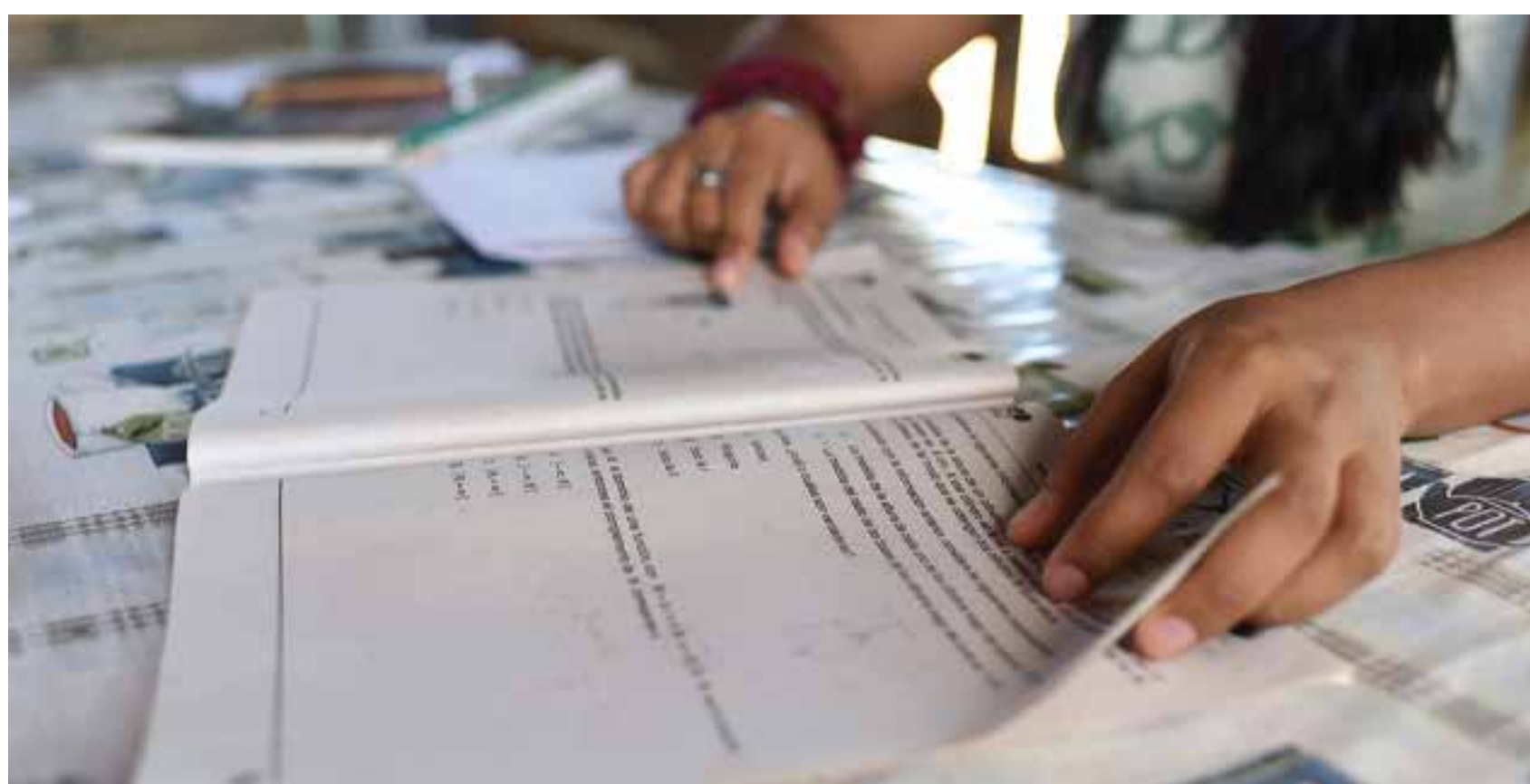
¡Tierra para quien la trabaja!

¡No al pago de la deuda!

¡Carcel y expropiación a los grandes evasores!

Juventud

Costa Rica y la incansable desigualdad



Por: Juventud PT

Recientemente la educación superior pública ha estado en discusión a nivel nacional, centralmente en lo que respecta al proceso de admisión que viven los y las estudiantes que salen de la educación secundaria.

Hace unas semanas el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), varió las categorías para ingreso en el 2021, priorizando a sectores de estudiantes de zonas rurales y de colegios públicos. Aunque creemos que es un cambio importante en la manera tan excluyente como se ingresa a las U públicas, nos parece que no es el camino correcto.

Como hemos planteado en estos 15 años del PT, el examen de admisión universitario ha sido una herramienta de exclusión muy grande para los sectores empobrecidos del país. Esta prueba de “aptitud” ignora la situación real de desigualdad social y educativa que afronta la juventud. Afirmamos esto sabiendo que las personas más pobres no tienen los mismos recursos para poder hacer frente al ingreso de la educación superior. Lo anterior, sumado a la situación tan crítica que se vive en el último año debido a la pandemia de COVID-19 y las políticas del PAC que complicaron más esa situación.

La Universidad de Costa Rica, siendo la universidad que más cupos brinda año con año, únicamente brindó 9000 cupos para el año 2019, número insuficiente a los miles de estudiantes que intentan entrar a la educación superior después del colegio. Siendo este entonces un filtro importante. Justamente porque la situación decadente del país ocasiona que mientras los jóvenes provenientes de hogares pobres tengan la necesidad de trabajar para poder ayudar a su familia ocasiona otro grande impedimento para que logren acceder a la universidad. Según datos del MCJ en 2013 un 50% de jóvenes entre 18 y 24 años no se encuentra estudiando, siendo tener que trabajar la principal razón de deserción con un 40%.

Creemos que el examen de admisión provoca que la educación pública, universal y gratuita no sea más que un mito y un privilegio al que solo un pequeño sector puede acceder. Ese sector que tuvo mayores oportunidades para prepararse.

Y aunque el ITCR implementó nuevos criterios de selección para el ingreso en el 2021, todos estos elementos nos hacen plantear en la necesidad de eliminar por completo este filtro de entrada a las universidades, pero además se vuelve urgente y muy necesaria mayor inversión en la educación superior pública, para dar más apertura a carreras y cursos en todas las sedes y recintos, más cantidad de becas para que más sectores empobrecidos puedan estudiar, más inversión en infraestructura, giras, investigación, entre otros rubros.

Además, creemos que es necesario contratar al personal en situación de interinazgo para poder hacer frente a los nuevos cupos, además de acabar con la tercerización dentro de las universidades, situación que tiene hoy en lucha a las y los trabajadores de SELIME en la UCR.

Afirmamos, que todo esto será posible únicamente cobrándole a las grandes empresas que tienen multimillonarias ganancias y que aún se les mantienen intactas, así como una suspensión en el pago de la deuda para poder financiar una educación universitaria de gratuita, universal y calidad.